

Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Miguel Auza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Simon Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Noviembre 18 de 1874.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Coahuila, por el C. Victoriano Cepeda, contra los efectos de los decretos números 172 y 180 de la Legislatura del propio Estado, que lo destituyen del cargo de Gobernador.

EDICTAMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: que el presente juicio de amparo ha venido al conocimiento del Juzgado de Distrito de Nuevo Leon, por recusacion del propietario y escusas de los dos suplentes del de Coahuila de Zaragoza, y como ya está resuelto el punto sobre suspension solicitada precisamente por el quejoso, se encuentra en estado de que el que suscribe, en ejercicio de su ministerio, pida lo conveniente en cuanto á lo principal.

El C. General Victoriano Cepeda, en su ocurno de 14 del pasado, solicita de la Justicia de la Union proteccion y amparo contra los decretos números 172 y 180 expedidos por la Legislatura de Coahuila, el uno en 10 de Setiembre de 1872 y en 5 de Junio el otro, por considerar que con ellos se violan en su perjuicio, las garantías individuales otorgadas en los arts. 13, 14 y 20 de la Constitucion federal de la República, en virtud de que por el primero de aquellos decretos se le destituye del cargo de Gobernador constitucional del Estado, de que estaba en ejercicio por el decreto de 26 de

Noviembre de 1871, y por el segundo, tácitamente se ratifica tal destitucion.

El que suscribe, considera, que para el fin principal que el quejoso se propone en su solicitud de amparo, es fuera del caso ocuparse de la cuestion que al principio de dicha solicitud se indica sobre si conforme á la Constitucion local de Coahuila, siete diputados forman legalmente *quorum* para expedir leyes y decretos, ó es preciso la concurrencia de ocho, cuya cuestion nace de la prevencion del art. 47 de la misma Constitucion, que exige para discutir y votar leyes, la presencia, por lo menos, de las dos terceras partes del número total de diputados de que se compone el Congreso, que es once; y por lo mismo, prescinde de su examen y pasa desde luego al de si en efecto han sido violadas ó no las citadas garantías, bajo el supuesto de que los siete diputados que expidieron el decreto número 172, tuvieran capacidad legal para hacerlo, funcionando como verdadero Congreso.

Esto dicho, y siendo así que la destitucion de un funcionario público del cargo que desempeña, no puede tener otro carácter que el de una pena impuesta por faltas ó delitos que haya cometido, es evidente que aquella solo puede decretarse por la autoridad á quien se haya cometido la facultad de hacerlo, por alguna ley promulgada con anterioridad á los hechos cuyo castigo se pretenda.

El art. 113 de la Constitucion de Coahuila, previene: que de los delitos oficiales cometidos por los funcionarios de primer orden, (de los cuales el Gobernador es uno) conozca el Congreso como jurado de acusacion, y el Supremo Tribunal de Justicia como jurado de sentencia: á esta disposicion debió sugetarse el Congreso de Coahuila, tratándose de exigir la responsabilidad al Sr. Cepeda por los delitos que le imputara, supuesto que en ella se establece el Tribunal que debiera castigarlo, en caso de ser declarado culpable por el jurado de acusacion; pero segun se ha visto antes, el Con-

greso por sí y ante sí juzgó y sentenció al Gobernador, con el hecho de decretar su destitucion por imputársele el delito de rebelion contra las instituciones, segun se dice en el art. 1º del decreto de que se viene hablando, contraviniendo así á lo espresamente mandado en el citado art. 113.

No fué, pues, la autoridad establecida por la ley, la que juzgó y sentenció al Sr. Cepeda.

Ahora bien, segun el art. 41 de la Constitucion federal de la República, la soberanía de los Estados está garantizada y debe respetársele siempre que la ejerzan en los términos establecidos en sus respectivas Constituciones particulares; de lo que se infiere, que al infringirse una de estas Constituciones, por no respetarse lo espresamente mandado en ellas, se infringe tambien la Constitucion general por contravenirse á la disposicion de su art. 41, que, como se ha dicho, exige entera sujecion á las constituciones locales; y como en el caso fué violado el art. 113 de la Carta particular de Coahuila, se rompió tambien la federal, y no solo en su art. 41, sino tambien en el 126 que la declara la Suprema ley de la Union.

En el art. 14 de la misma Carta fundamental, otorga la garantía de que nadie pueda ser juzgado ni sentenciado sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas á él, por el Tribunal que previamente haya establecido la ley. El Sr. Cepeda, como Gobernador de Coahuila, debió ser juzgado y sentenciado por el tribunal que establece el art. 113 de la Constitucion del Estado, para obrar de entera conformidad con los arts. 14, 41 y 109 de la federal de la República; mas no habiéndose procedido de este modo, indudablemente se faltó á estos artículos constitucionales, y como el 14 constituye una garantía, faltándose á él, quedó violada la garantía indudablemente.

Por lo que toca á la primera parte del art. 13, cuya garantía tambien se reclama,

puede igualmente decirse que ha sido violada, por que no habiéndose observado lo prescrito en el 113 de la Constitucion local, hasta cierto punto se constituyó la Legislatura de Coahuila en un Tribunal especial para juzgar al quejoso. lo cual está prohibido por el Pacto federal en el artículo citado.

Además, como al Sr. Cepeda no solo no se le juzgó conforme al tantas veces citado art. 113, como debió haber sucedido, atento su carácter de Gobernador, pero ni tampoco se le respetaron las garantías que todo acusado tiene segun el art. 20 de la Constitucion de la República, porque ni siquiera se le sujetó á juicio, está fuera de duda que tambien las garantías consignadas en dicho art. 20, han sido violadas en su persona.

Aquí parece oportuno manifestar al Juzgado, que á juicio del Promotor, el amparo que se solicita por violacion de garantías individuales, siempre que esta sea una realidad, debe otorgarse, sin que importe que quien lo solicita sea ó no funcionario público, pues su investidura en manera alguna puede quitarle el carácter de hombre, y el tít. 1º seccion 1ª de la Constitucion federal de la República mexicana, otorga á todos los hombres, sin distincion, las garantías que en aquella parte se consignan, así como tampoco debe obstar el carácter de la autoridad ejecutora de la violacion, pues el art. 1º de la misma Carta federal, impone tambien á todas las autoridades del país, sin distincion, el imprecindible deber de respetar y sostener aquellas garantías, y la ley de 20 de Enero reglamentaria de los arts. 101 y 102, concede el recurso de amparo contra toda ley ó acto de cualquiera autoridad que viole las garantías individuales.

Antes de concluir, advierte el que suscribe, que la solicitud del quejoso contenida en el penúltimo párrafo de su escrito, es estemporánea en cualquier sentido que venga resolviéndose este recurso de amparo, pues la ley relativa demarca los procedimientos que deben observarse para la eje-

cucion de las providencias y fallos que pronuncie la Justicia federal, y á ellos debe sujetarse indudablemente el Juzgado.

Fundado en lo que breve y suscintamente queda dicho, y en la fraccion 1ª del art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, y supuesto que el decreto núm. 180 no es mas que la ratificacion del 172 y debe aplicarse á aquel lo dicho respecto de este, en lo relativo al caso del Sr. Cepeda, el Promotor concluye con la proposicion siguiente:

Unica: La Justicia de la Union ampara y protege al C. General Victoriano Cepeda, contra los efectos de los decretos números 172 y 180 expedidos por la Legislatura de Coahuila, en virtud de los que se destituye al quejoso del cargo de Gobernador constitucional, cuyo carácter tiene por decreto de 26 de Noviembre de 1871.

Monterey, 23 de Julio de 1874.—*Lic. S. Roel.*

Es copia que certifico. Monterey, 28 de Julio de 1874.—*Lic. S. Roel.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Monterey, Julio 27 de 1874.—Visto este juicio de amparo promovido por el C. Victoriano Cepeda, como Gobernador constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, contra los efectos de los decretos números 172 y 180 de la II. Legislatura del mismo, el primero de 10 de Setiembre de 1873, y el segundo de 5 de Junio último, por los que se le destituyó de su cargo, diciendo: que se violaron en su persona las garantías que acuerda la Constitucion general en sus artículos 13, 14 y 20, y que por uno de dichos decretos, se le juzgó por un Tribunal especial, que se estableció con posterioridad al hecho, sin guardarse ninguna de las formalidades que establece la ley, para imponer una pena, y que por el otro se confirmó lo que se dispuso en el primero.

Vistos los informes del Gobierno actual del propio Estado, como ejecutor de esos decretos, sobre la suspension inmediata de sus efectos y que se solicitó sobre lo princi-

pal, en que manifiesta entre otras cosas, que habiéndose rebelado el Sr. Cepeda contra el poder Legislativo, dando un verdadero golpe de estado, rompió la Constitucion y con ella sus títulos de Gobernador, é impidió que se le pudiera juzgar con todas las formalidades legales, porque habia desconocido á sus Jueces, quienes al dictar su decreto número 172, no hicieron mas que declarar el estado en que se hallaba Coahuila en virtud de la rebelion, sin que eso deba considerarse como una destitucion del que era Gobernador; y visto todo lo demas que consta de este expediente, así como el auto de citacion para sentencia, y considerando:

Que segun los artículos 112 y 113 de la Constitucion del Estado de Coahuila, debe conocer su Legislatura como Jurado de acusacion, de los delitos oficiales y comunes del Gobernador, para declarar en el primer caso si es ó no culpable, y si ha ó no lugar á proceder en el segundo, quedando, al ser afirmativa la decision, suspenso, pero no destituido el Gobernador y sujeto á los Tribunales para que ellos impongan la pena, ó lo juzguen segun derecho; sin que en ningun evento se confiera al Congreso, la facultad de sentenciar, ni de destituir, ni de imponer alguna otra pena.

Que el artículo 41 de la Constitucion general, garantiza á los Estados la observancia de sus Constituciones particulares, y la Legislatura de Coahuila, al destituir de su cargo al Gobernador por dichos decretos, no obró conforme á su Constitucion, y se erigió en Tribunal especial, que no estaba establecido previamente por la ley, violándose en consecuencia, las garantías que otorga la Constitucion general en sus artículos 13 y 14; pues la destitucion de un Gobernador constitucional, importa una pena grave por la categoría del empleado destituido, para lo cual tampoco está facultado el Congreso, por ser exclusiva de la autoridad judicial la aplicacion de las penas propiamente tales.

Que para imponer la pena de destitucion al Gobernador de Coahuila, no se observaron

las prevenciones del artículo 20 de la Constitución de la República, violándose las garantías que él otorga; pues aunque se dice en el informe del Gobierno actual, que no se pudieron llenar esos requisitos, porque el Sr. Cepeda se había rebelado contra sus jueces que no tenían garantías, esto parece que no debe dar derecho á que por esto no se observe la Constitución, que debe ser la regla universal para todas las autoridades, sin que se autorice á nadie á violarla, porque otro la haya despedazado, y mas cuando el Congreso de Coahuila al dar su decreto de 5 de Junio último, en que de un modo indirecto reprodujo de nuevo el número 172, no se hallaba en las circunstancias que guardaba en Setiembre, pudiendo en el último tiempo sin peligro alguno, haber llenado las prevenciones del expresado artículo 20 de la Constitución.

Y considerando por último: que no tiene objeto tratar la cuestion que se toca incidentalmente, tanto por el quejoso como por el Gobierno actual de Coahuila, sobre si siete diputados forman ó no quorum para dar leyes y decretos; el C. Juez de Distrito de Nuevo Leon, definitivamente juzgando, y de conformidad con lo expuesto por el C. Promotor fiscal, con el artículo 101 de la Constitución general y ley de 20 de Enero de 1869, dijo:

Primero: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Victoriano Cepeda contra los efectos de los decretos números 172 y 180 de la H. Legislatura de Coahuila, por los que fué destituido de su cargo de Gobernador constitucional.

Segundo: que se publique esta sentencia en el Periódico oficial de este Estado, se saquen las copias respectivas para el Semanario Judicial, y se remita este expediente á la Suprema Corte de Justicia para su revision. Notifiquese.

El expresado Juez de Distrito así lo decretó y firmó por ante mí el secretario: doy fé.—*Lic. F. Valdés Gomez.*—*Pablo Borrego*, secretario.

TOMO VI.—PARTE II.

Es copia que certifico. Monterey, 28 de Julio de 1874.—*Pablo Borrego*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Setiembre 14 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Coahuila por el C. Victoriano Zepeda, contra los efectos de los decretos núms. 172 y 180 de la Legislatura del propio Estado, que lo destituyó del cargo de Gobernador.

Considerando 1º: que la aplicacion de las penas propiamente tales, es exclusiva de la autoridad judicial; y la política ó administrativa solo puede imponer como correccion hasta quinientos pesos de multa, ó hasta un mes de reclusion, en los casos y modo que expresamente determina la ley, (art. 21 de la Constitución federal.)

2º: que la autoridad legislativa solo puede: I. Para constituirse ó integrarse, compeler á sus miembros ausentes bajo las penas que la ley designe, (art. 61.) II. Funcionando como Gran Jurado, declarar: si el acusado es ó no culpable, ó si ha ó no lugar á la formacion de causa contra él, (arts. 103, 104 y 105.) III. Obrando en el círculo de sus propias y naturales facultades, dictar toda clase de resoluciones que no tengan otro carácter que el de ley ó acuerdo económico, (arts. 64 y 72.)

3º: que la aplicacion de las penas propiamente tales por la autoridad legislativa, seria ademas opuesta al art. 50, que establece la division de los poderes, en legislativo, ejecutivo y judicial; previniendo que nunca podran reunirse dos ó mas de estos, en una sola persona ó corporacion.

4º: que las Legislaturas de los Estados deben sujetarse á estas prescripciones de la Constitución federal, (arts. 40, 41, 109, 126 y 128); y abstenerse en consecuencia,

de toda aplicacion de penas propiamente tales.

5º: que la destitucion del cargo de Gobernador constitucional de un Estado, debe estimarse como una pena propiamente tal, que no puede aplicar en ningun caso la autoridad legislativa (Congreso de la Union ó Legislatura de Estado) puesto que esa pena no es reducible á las correccionales de multa ó reclusion de que habla el art. 21, ni á las conminatorias especiales de que trata el art. 61; ni es de tenerse como la simple declaracion de culpabilidad ó de haber lugar á formacion de causa, que establecen los arts. 103, 104 y 105; ni puede ser materia de ley ó acuerdo económico, conforme á los arts. 64 y 72.

6º: que en consecuencia, los decretos números 172 y 180 de la Legislatura de Coahuila, que destituyen del cargo de Gobernador constitucional del Estado al C. Victoriano Zepeda, se han dado en contravencion á los arts. constitucionales citados, y violan en la persona del quejoso, no solamente las garantías que ellos le otorgan, sino ademas, las especialmente consignadas en los arts. 13, 14 y 20 de la misma Constitucion federal.

7º: que independientemente de los decretos núms. 172 y 180 ya citados, el C. Victoriano Zepeda se encuentra separado de su cargo de Gobernador del Estado por otras varias causas, resoluciones ó actos de autoridad que no han sido reclamadas ni debatidas, y que por lo mismo no deben prejuzgarse en este juicio.

Por las razones y fundamentos expuestos en los anteriores considerandos, se declara:

1º: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Victoriano Zepeda, contra los efectos de los decretos núms. 172 y 180 reclamados.

2º: Este amparo no puede entenderse contra los demas actos de autoridad que no han sido reclamados, y que tienen separado de su encargo constitucional al quejoso.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su

origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José María Iglesias.*—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*S. Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Enero 6 de 1875.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Nuevo Leon por el C. Prisciliano Zambrano, contra el C. Alcalde 2º de Monterrey Inc. Perfecto Gutierrez, que lo citó á juicio verbal y lo conminó con imponerle multas si no concurría al juicio que le promovió el C. Julio Treviño y con fallar en rebel-dia.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que los presentes autos formados con motivo de la queja de amparo interpuesta por el C. Prisciliano Zambrano por la violacion en su persona de una de las garantías que el pacto fundamental de la República otorga al hombre, se ha mandado que conforme á la ley de la materia, permanezcan á disposicion de las partes en la secretaria del Juzgado, á fin de que puedan tomar los apuntes que crean convenientes, y dentro del término formular sus respectivos alegatos, en cuya virtud, presenta el que suscribe el suyo, que como se advertirá, está reducido á muy breves y